

Las «juntas rojas» y las temidas elecciones

Las «juntas rojas» continúan extendiéndose por Italia, como consecuencia de las elecciones de administración local del 15 de junio. El malestar político de los partidos gubernamentales crece: la Democracia Cristiana reprocha al Partido Socialista que colabore o se alie abiertamente con los comunistas en la formación de estas juntas —consejos municipales o regionales—, y se habla ya de que la tirantez provoque una crisis. No se ve posible cómo Aldo Moro puede contenerla y, si se produce, cómo se resolvería. Se habla insistentemente de elecciones anticipadas, y la perspectiva es aún más inquietante para los partidos gubernamentales: ateniéndose a los últimos resultados de las elecciones municipales, unas elecciones para la asamblea producirían una deterioración mayor aún de la Democracia Cristiana.

La región del Piamonte tiene, desde principios de agosto, unas juntas de socialistas y comunistas; la asamblea de la región del Laico tiene un presidente comunista. Son «rojas» Turín, Génova, Florencia, Bolonia. En Milán, la Democracia Cristiana libra una dura batalla: finalmente ha caído en manos de

la unión de socialistas y comunistas (un alcalde socialista, un segundo comunista). Lo sucedido en Milán ha impresionado considerablemente a los medios políticos. No solamente la nueva junta «roja» ha obtenido los votos de comunistas, socialistas y democracia proletaria, sino que también han votado a su favor dos concejales de la Democracia Cristiana y tres del PSDI (la socialdemocracia). Inmediatamente los dos partidos han decretado la expulsión de sus tráfugas y les han condenado con duras palabras, acusándoles de corrupción y de haber traicionado a sus electores, que les habían votado en la confianza de que favorecerían la solución centro-izquierda. «No he traicionado a nadie —ha dicho uno de los demócratas cristianos, Francesco Ogliari, abogado, director del Museo de Ciencia y Técnica—. He obedecido a mi conciencia. No he aceptado un cargo en la junta por ambición». Al condenar y expulsar a los tres miembros de la socialdemocracia, el miembro del comité central de ese partido, Enrico Rizzi, ha declarado: «Una página de vergonzoso oportunismo ha sido escrita en la historia del Concejo Co-

munal de Milán por los consejeros Armanini, Fiorellini y Pillitteri (los tres tráfugas del partido que han votado la coalición de izquierdas). Este episodio de vulgar transformismo político no compromete el prestigio y la dignidad del PSDI, pero sí la responsabilidad moral de quienes lo han premeditado y ejecutado».

El nuevo secretario general de la Democracia Cristiana, Zaccagnini, no puede tomar decisiones demasiado espectaculares o que cambien definitivamente el rumbo del partido: el peso muerto, la inercia de las corrientes internas se lo impiden, y necesita el Congreso nacional de otoño para presentar un nuevo programa y obtener el consenso de todo el partido. En el ala izquierda de la Democracia Cristiana es donde, por una aparente paradoja, se incubaba la mayor oposición al «compromiso histórico» o cualquier forma de colaboración con los co-

munistas. Según ellos, el compromiso histórico «terminaría por variar de todo componente popular a la Democracia Cristiana y las izquierdas perderían toda representación. Por eso son las izquierdas (del partido) las que no temen que la democracia popular vaya a parar a la oposición», según palabras de Giovanni Trovati en «La Stampa». Pero los demás sectores de la Democracia Cristiana ven con terror la posibilidad de encontrarse en la oposición después de años y años de gobierno. Esa oposición será inevitable si el Partido Socialista decide finalmente una alianza electoral o un programa común con el Partido Comunista; y la declaración del comité central del PSI, según la cual todo el panorama político italiano ha cambiado después del 16 de junio, más su actitud en las grandes comunas como en la de Milán, hacen muy previsible este cambio de alianzas. ■

MADRID

«Metro» más caro

Por segunda vez en el plazo de un año, la Compañía Metropolitana de Madrid, arrendataria del «Metro», ha elevado las tarifas. En ambas ocasiones, la época elegida para efectuarla ha sido el paréntesis veraniego. Desde el domingo 10 de agosto, las nuevas tarifas que regirán serán: seis pesetas el billete sencillo (antes cinco); ocho pesetas el billete de ida y vuelta y el de festivos (antes siete); 36 pesetas el abono semanal de seis billetes de ida y vuelta (antes 30); 150 pesetas el abono mensual de 25 billetes de ida y vuelta (antes 125). Esta nueva subida supone un incremento del 20 por 100 en los billetes, con excepción del de ida y vuelta y festivos, cuyo incremento es algo menos del 14 por 100.

Esta subida, para una familia con cuatro miembros que se desplazan diariamente, con jornada partida, supone anualmente un incremento en sus gastos por transporte del orden de 3.500 pesetas, sin contar desplazamientos en festivos, en el mejor de los casos. La empresa hecha mano del incremento de costos de explotación, especialmente en el factor trabajo, para justificar la medida. A este respecto se ha recordado, a través de la prensa diaria, las ventajas obtenidas por los trabajadores en el convenio de 1974, con unos incrementos salariales de un 30 por 100 sobre el sueldo base, más 42.000 pesetas lineales, totalizando una cantidad anual cifrada en 253 millones de pesetas. Sin embargo, echando las cuentas de la vieja, y teniendo en cuenta el dato

de que en 1972 utilizaron el «Metro» 502 millones de usuarios y que este año, entre enero y julio, lo han hecho 256,6 millones, la subida por ingresos de explotación duplica con creces los incrementos salariales.

Esta táctica empresarial de enjugar las «pérdidas» acaecidas con ocasión de los sucesivos convenios colectivos, merced a la presión de los trabajadores para obtener una serie de reivindicaciones mínimas, resulta ya vieja en la Compañía Metropolitana Madrileña. En efecto, con excepción del año 1969, en que se dictó norma de obligado cumplimiento, todos los demás años, en que se ha negociado un convenio colectivo, han conocido una elevación del precio del billete que, en definitiva, acaba por redundar en las clases populares usuarias de este sistema de transporte. Parece sintomática, por otra parte, la actitud de la Administración, que automáticamente accede a este tipo de subidas en un medio de transporte paradójicamente sujeto a precios «políticos» por sus mismas características. Si los trabajadores de este tipo de empresas, concebidas como servicios públicos, están sometidos a una legislación especial que puede provocar su militarización, como ya ocurrió en julio de 1970, cuando los empleados del «Metro» decidieron ir a la huelga en defensa de sus reivindicaciones, parece lógico que la patronal sufra el mismo tipo de rigor estatal a la hora de elevar indiscriminadamente los precios.



En Milán, la Democracia Cristiana libraba una dura batalla: finalmente ha caído también en manos de la unión de socialistas y comunistas (un alcalde socialista, un segundo comunista).